

Defensoría del Pueblo

"Año de la Promoción de la Industria Responsable y del Compromiso Climático"
 "Decenio de las Personas con Discapacidad en el Perú"

OFICIO N° 0306—2014—DP

Lima, 10 JUL. 2014

Señor

DANIEL FIGALLO RIVADENEYRA

Ministro de Justicia y Derechos Humanos

Presente.—

De mi mayor consideración:

Es grato dirigirme a usted para saludarlo cordialmente y, a la vez, referirme al Plan Nacional de Derechos Humanos 2014-2016 (en adelante, PNDH), aprobado mediante el Decreto Supremo N° 005-2014-JUS, del 5 de julio de 2014.

Nuestra institución destaca que la aprobación e implementación de un PNDH resulta de vital importancia en toda sociedad democrática, al convertirse en una herramienta que orienta la actuación del Estado en la promoción y defensa de los derechos fundamentales, en particular de la población en situación de mayor vulnerabilidad, en concordancia con la legislación nacional e internacional.

Con ese objetivo, durante el proceso inicial de formulación del PNDH, nuestra institución hizo llegar sus comentarios sobre la metodología y el contenido del mismo, destacando la importancia de la participación de la sociedad civil en las audiencias regionales, a fin de identificar las brechas que dificultan el ejercicio pleno de los derechos humanos en el país.

Al respecto, resulta positivo que el documento contenga acciones específicas para promover una cultura de respeto a los derechos humanos en los diversos niveles del Estado (central, regional y local). En esa misma línea, con el afán de que el país cuente con un PNDH que aborde la problemática identificada por todos los actores que han contribuido en este proceso, me permito recomendarle que puedan incorporarse algunos temas importantes.

En ese sentido, observamos con preocupación que no se haga ninguna mención a la situación de las personas con distinta orientación sexual e identidad de género ni a la necesidad de políticas específicas a su favor. Esta ausencia contradice la visión, misión y lineamientos estratégicos reconocidos en el propio documento, así como en los instrumentos y resoluciones de la Organización de Naciones Unidas (ONU) y otras organizaciones internacionales que lo sustentan. Ello, pese a que la «Encuesta para medir la opinión de la población peruana en relación con los derechos humanos» del Minjus —que sirvió como línea de base para el desarrollo de políticas en favor de grupos de especial protección— señala que el 93% de la población considera que la población LGBTI¹ se encuentra más expuesta a la discriminación, el 88% reconoce maltratos físicos contra este colectivo, mientras que el 92% indicó que sufren maltrato verbal.

Debe recordarse que en su último informe, el Comité de Derechos Humanos de la ONU ha instado al Estado peruano a modificar su legislación, con el fin de prohibir la discriminación por los motivos antes señalados² y a «establecer clara y oficialmente que no tolera ninguna forma de

¹ Se ha utilizado la sigla LGBTI para referirnos al grupo poblacional conformado por personas lesbianas, gays, bisexuales, trans e intersex.

² Comité de Derechos Humanos. Observaciones finales sobre el quinto informe periódico del Perú, aprobadas por el Comité en su 107° período de sesiones (11 a 28 de marzo de 2013). Pronunciamiento similar fue emitido por el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de Naciones Unidas.

Defensoría del Pueblo

estigmatización social de la homosexualidad, la bisexualidad o transexualidad, la discriminación o la violencia contra personas por su orientación sexual o identidad de género». Esta situación expresa, además, una falta de continuidad en las políticas estatales, pues el Plan Nacional 2006–2010 sí incorporó algunas acciones para contribuir a revertir la grave situación de los derechos fundamentales de este colectivo.

Por otro lado, el PNDH tampoco hace mención a los derechos de las trabajadoras del hogar, lo que no se condice con la situación de vulnerabilidad y discriminación que afecta a este sector de la población y que demanda la adopción de medidas y políticas que contribuyan a proteger adecuadamente sus derechos. Así, resulta necesaria la ratificación del Convenio N° 189 de la Organización Internacional del Trabajo sobre trabajo doméstico.

Otro aspecto está referido a las víctimas de la violencia del período 1980–2000, debido a que el diagnóstico y las acciones contempladas en el PNDH no recogen sus principales demandas en justicia, reparación y memoria. Así, pese a las limitaciones que ha mostrado el sistema para investigar y sancionar graves vulneraciones a los derechos humanos, no se incorporan acciones para superar estas deficiencias, como, por ejemplo, fortalecer los órganos encargados de estos casos así como al sistema de protección de víctimas y testigos. De igual forma, no se reconoce la urgencia de reabrir el Registro Único de Víctimas para las reparaciones económicas, el incremento del monto de la indemnización, el pago por cada víctima acreditada en casos de múltiple afectación, y la cesión del derecho en el programa de reparaciones en educación, entre otros.

También, verificamos que no se contempla el reconocimiento de la competencia del Comité contra la Desaparición Forzada, previsto por la Convención Internacional para la protección de todas las personas contra las desapariciones forzadas, lo que permitiría que nuestro país cuente con mecanismos efectivos para prevenir y sancionar este grave delito.

Asimismo, advertimos que el PNDH busca implementar objetivos del Sistema Sanitario contenidos en el Plan Nacional Concertado de Salud, sin tomar en cuenta que los mismos corresponden al período 2007–2011. Si bien resulta adecuado acciones enfocadas a garantizar el acceso a este derecho, el plan no hace mención a medidas para superar la falta de infraestructura y recursos para el ejercicio pleno de este derecho. En particular, en cuanto a las personas viviendo con VIH/Sida y Tuberculosis, consideramos importante que el PNDH —junto con las campañas de sensibilización ya previstas— incorpore metas para garantizar el abastecimiento y entrega de medicamentos, además, de superar las dificultades para la atención de personas que tienen problemas de indocumentación.

En lo que se refiere a la política migratoria, debemos destacar que se hayan considerado acciones para la protección de los derechos de los migrantes y de sus familiares, en particular respecto al fortalecimiento de los servicios consulares, las políticas de reinserción de los retornantes, así como acciones de fiscalización para prevenir la trata de personas. De modo complementario, resulta urgente que también se contemplen medidas de protección, así como protocolos especiales para garantizar los derechos de las personas refugiadas y los de sus familiares, al igual que su incorporación en la sociedad, de acuerdo con los compromisos asumidos por el Estado peruano.

De otro lado, advertimos que no se contempla la ratificación de algunos convenios importantes en materia de lucha contra la discriminación, como la Convención Interamericana contra toda forma de Discriminación e Intolerancia, y la Convención Interamericana contra el Racismo, la Discriminación Racial y formas conexas de Intolerancia, aprobadas en el marco de la Organización de Estados Americanos, entre otros. Estos instrumentos establecen pautas y criterios para una mayor efectividad, por parte del Estado peruano, en la erradicación de estas prácticas.



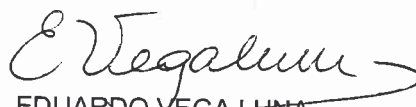
Defensoría del Pueblo

Estos son algunos aspectos sobre los que me permito llamar la atención, sin perjuicio de otros que requieran una revisión más detenida ante la problemática expuesta por diversas organizaciones, como por ejemplo, la necesidad de incorporar los derechos colectivos de la población indígena (participación política, protección de sus saberes y conocimientos o protección de sus tierras y territorios comunales), impulsar la creación de casas refugio para mujeres en casos de violencia de género, identificar a todos los actores que tienen responsabilidad en las acciones que se buscan implementar,³ así como revisar y precisar algunos indicadores de las metas previstas en el documento.⁴

Convencido de su compromiso con la defensa de los derechos humanos en el país, me permito solicitarle, señor Ministro, que pueda evaluar convenientemente los aspectos anotados, proponiendo las medidas necesarias para contar con un PNDH que atienda a todas las personas, sin ninguna discriminación, cumpliendo su objetivo de revertir situaciones que puedan generar mayor invisibilidad y exclusión.

Con la seguridad de su gentil atención, me valgo de la oportunidad para reiterarle los sentimientos de mi especial consideración y estima.

Atentamente,


EDUARDO VEGA LUNA
DEFENSOR DEL PUEBLO (e)

³ Por ejemplo, en el Lineamiento Estratégico N° 3: objetivo 12: «Consolidar una política pública para la igualdad de género y la eliminación de la discriminación contra la mujer, se debería incorporar al Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo».

⁴ Por ejemplo, en el caso de las personas privadas de libertad, se señala como indicador la reducción de entre 5 y 10% del hacinamiento en las cárceles, a pesar de que la sobrepoblación es del orden del 126%.